CASO GONZALO BELANO Y OTRAS 807 PERSONAS WAIRENSES

VS.

REPÚBLICA DE ARCADIA

CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS

REPRESENTANTES DEL ESTADO DE ARCADIA

ÍNDICE

ABREVIATURAS	3
1. BIBLIOGRAFÍA	4
A. Libros y artículos académicos	Error! Bookmark not defined.
B. Casos legales	Error! Bookmark not defined.
C. Documentos legales	Error! Bookmark not defined.
2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS	11
3. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO	14
3.1 Aspectos preliminares de admisibilidad	14
3.1.1 Falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna de Arcadia	14
a) Recurso de Casación Administrativa frente al Decreto Ejecutivo que ordena la deportación	16
b) Recurso de Juicio de amparo frente al Decreto Ejecutivo que ordena la deportación	17
c) Recurso de Habeas corpus frente a la presunta vulneración de la libertad personal	18
d) Recurso de reparación del daño directo	19
3.2 Análisis de los asuntos legales relacionados con la CADH y otros instrumentos internacionales aplicables	20
3.2.1 Arcadia respetó los arts. 22.7 y 22.8 de la CADH, en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento internacional	21

3.2.2 Arcadia respetó el art. 4 de la CADH en relación con el principio de no devolución y las obligaciones de los arts. 1.1 de la CADH	23
3.2.3 Arcadia respetó el art. 7 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento	25
3.2.4 Arcadia respetó los arts. 8 y 25 de la CADH, en relación con el principio de no devolución y el art. 1.1 del mismo instrumento	28
3.2.5 Arcadia respetó el art. 17 de la CADH en relación con el art 1.1 del mismo instrumento.	31
3.2.6 Arcadia respetó el art 19 de la CADH en relación con el art 1.1 del mismo instrumento	32
3.2.7 Arcadia respetó el art. 24 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento	33
4. PETITORIO.....	37

ABREVIATURAS

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	ACNUR
Artículo/ (s)	Art./Arts
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	CIDH o comisión
Constitución Política de la Republica de Arcadia	CN
Convención Americana sobre Derechos Humanos	CADH o Convención
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951	Convención 1951
Corte Interamericana de Derechos Humanos	Corte IDH

Derechos Humanos	DDHH
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	DESC
Estados Unidos de Tlaxcochitlán	EUT/Tlaxcochitlán
Hechos del caso	HC.
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria	Ley sobre Refugiados
Opinión Consultiva	OC
Organización de las Naciones Unidas	ONU
Respuesta y preguntas aclaratorias	RPA
Sistema Interamericano de Derechos Humanos	SIDH
Sistema Universal de Derechos Humanos	SUDH
Tribunal Europeo de Derechos Humanos	TEDH

BIBLIOGRAFÍA

A. Libros y artículos académicos

- Cançado Trindade, Antonio, La protección de los DESC en Estudios Básicos de Derechos Humanos, T. 1, San José, 1994
- O'DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos – Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Primera Edición. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá 2004.

B. Casos Legales

Corte IDH.

- **Casos contenciosos:**

- Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. **Pág. 15**
- Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. **Págs. 17,22.**
- Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. **Pág.16,17,23.**
- Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6. **Págs. 14,16,19.**
- Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. **Pág. 24.**
- Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50. **Pág.18.**
- Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. **Pág. 17.**
- Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. **Pág. 28.**
- Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. **Pág. 16.**

- Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. **Págs. 13,16.**
- Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103. **Pág. 19.**
- Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. **Pág. 25.**
- Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. **Pág. 24.**
- Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana sentencia de 8 de septiembre de 2005, serie C No. 130. **Pág.34**
- Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. **Pág.26.**
- Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. **Págs. 24,25,26.**
- Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. **Pág. 25.**
- Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. **Pág. 29.**
- Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. **Pág. 19.**

- Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. **Págs. 20,21,25,34.**
- Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Reparaciones y Costas, serie C No. 224. **Pág.34.**
- Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C no. 226. **Pág.15.**
- Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227. **Pág. 29,30.**
- Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. **Pág. 33.**
- Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251. **Pág. 28,29.**
- Corte IDH. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256. **Pág.23.**
- Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259. **Pág.14.**
- Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. **Pág.30.**
- Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272. **Pág. 20,21,22,28,30.**
- Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. **Pág.25.**

- Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278. **Pág.18.**
- Corte IDH. Caso hermanos Landeta Mejía y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281. **Pág.19.**
- Corte IDH. Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. **Pág. 31.**
- Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. **Págs.13,33.**
- Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315. **Pág.17.**
- Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316. **Pág.13.**
- Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318. **Pág. 32.**
- Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2016. Serie C No. 322. **Pág. 17.**
- Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329. **Pág. 35.**
- Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. **Pág.14.**

- Corte IDH. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 356. **Pág. 23,32.**
- **Opiniones consultivas:**
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 30 de enero de 1987. Serie A No. 8. **Pág.18.**
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-11/90. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b CADH). 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. **Pág.15.**
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. **Pág.20.**
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. **Pág. 21,25.**
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-25/18. La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25. **Pág.8**
- **Medidas provisionales:**
- Corte IDH. Caso de Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 18 de agosto de 2000, considerando 14. **Pág.22.**
- Corte IDH. Asunto Gutiérrez Soler, Medidas Provisionales respecto de Colombia, Resolución de la Corte Interamericana del 11 de marzo de 2005, considerando. **Pág.24.**

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Comisión IDH, Informe N°27/09, Fondo, Caso 12.249, “Jorge Odir Miranda Cortez y otros vs. El Salvador”, 20 de marzo de 2009. **Pág. 36.**
- Comisión IDH, Informe N° 100/01, Caso 11.381, “Milton García Gajardo y otros vs. Nicaragua”, 11 de octubre de 2001. **Pág.36.**

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- TEDH, Caso Akdivar v. Turkey, application no. 21893/93, sentencia del 16 de septiembre de 1996. **Pág.16.**

C. Documentos Legales

- Asamblea General de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/7/4, 10 de enero de 2008. **Pág.25,27.**
- Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/11/7, 14 de mayo de 2009. **Pág.25.**
- ONU. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966).
- ONU. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966). **Pág.36.**
- ACNUR. Determinación del estatuto de refugiado, No. 8 (XXVIII) (1977). **Pág.28.**
- ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), U.N. Doc. E/1991/23, Quinto Período de Sesiones (1990).

- ACNUR. Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, 1992. **Pág.29.**
- ONU. La Convención sobre los derechos del niño (1989), ratificada en 1990, y sus protocolos facultativos (2000). **Pág. 21.**
- ONU. Observaciones del FFV a la apelación de la “Decisión estableciendo los principios y procedimientos a aplicar en las reparaciones” de la SPI I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso de la Fiscalía v. Thomas Lubanga Dyilo, 08 de abril de 2013. **Pág.24.**
- ACNUR. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 18, No discriminación. **Pág.33.**
- OEA. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. **Pág.29.**
- OEA. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) **Págs10, 15.**
- OEA. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. **Pág.33.**
- OEA. Convención sobre Asilo Territorial. **Pág.21.**
- OEA. Convención sobre Asilo Diplomático **Pág.21.**

1. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

a) Generalidades del Estado de Arcadia

1. Arcadia es un Estado ubicado en el Continente Americano, reconocido por su fuerte democracia, su sólida institucionalidad pública, su estabilidad política y económica, sus bajos niveles de criminalidad y violencia. Ratificó todos los tratados del Sistema Universal de DDHH,

al igual que la gran mayoría del SIDH, aceptando la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1971 con la ratificación de la CADH.

2. Arcadia goza de una reputación internacional en materia de integración y de respeto a los DDHH de la población migrante y de las obligaciones internacionales contraídas, además es reconocido por ser un Estado de destino de personas migrantes. Asimismo, reconoce y regula, en su CN (art. 48), el derecho a buscar y recibir asilo de acuerdo a la normativa internacional en materia de derechos de población migrante, especialmente acorde a la Convención 1951 y su Protocolo 1967.

b) Migración masiva y medidas tomadas por Arcadia

3. En el año 2014 se organizó una caravana de aproximadamente 7.000 personas waienses, que tenían como destino el Estado de Arcadia, quienes, después de 5 semanas de recorrido, se encontraban en la frontera entre Tlaxcochitlán y Arcadia.

4. El gobierno de Arcadia apoyó el control migratorio en la frontera sur y brindó ayuda humanitaria a las personas migrantes, considerados un grupo en situación de extrema vulnerabilidad, prestando servicios de albergue, alimentos y brigadas de salud, con el fin de explorar una respuesta integral ante la entrada masiva de personas waienses a su territorio, solicitó una reunión extraordinaria con agencias del SUDH, como el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

5. En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, constitucionales y legales Arcadia brindó toda la ayuda necesaria a la población waiense; por ello, optó por abrir sus fronteras, permitir el ingreso de los waienses y reconocer como refugiados prima facie a quienes no hubieran cometido graves delitos comunes en su país. Además, ante los escenarios de xenofobia por la

llegada masiva de personas waienses, Arcadia implementó campañas de sensibilización y capacitación.

c) Excepción a la condición de refugiado

6. Durante el registro de los inmigrantes, Arcadia identificó a 808 personas que tenían antecedentes penales y que serían excluidas del reconocimiento de la condición de refugiado, quienes fueron trasladados, en condiciones dignas, a diferentes instituciones estatales para que permanecieran allí mientras se resolvía su situación migratoria.

7. Ante el riesgo que representaba para estas personas el regresar a su país de origen, así como la existencia de recursos limitados y la consecuente incapacidad de recibirlos a todos en su territorio, Arcadia hizo un llamado a la comunidad internacional para que, con base en los principios de responsabilidad compartida, cooperación internacional y el derecho a la no devolución, aceptaran a estas personas en su territorio. Ante la falta de respuesta de los otros Estados, Arcadia suscribió un acuerdo con Tlaxcochitlán, consistente en que este último recibiría a las 808 personas excluidas del reconocimiento de refugiados y estas no serían deportadas a su país de origen debido al peligro que enfrentaban, a cambio, Arcadia se comprometió a efectuar un apoyo económico periódico; sin embargo, Tlaxcochitlán, en decisión unilateral, deportó a las 808 personas, por lo cual, ante el incumplimiento del acuerdo binacional, Arcadia no realizó el siguiente pago.

8. Después de su llegada a Waira, se reportó que 29 de las personas deportadas habrían sido asesinadas, mientras que 7 habrían sido desaparecidas.

d) Trámite ante el SIDH

9. El 20 de enero de 2016, la Clínica Jurídica interpuso, en nombre de las 808 personas deportadas, una petición ante la CIDH, argumentado la presunta violación de los artículos 4, 7, 8,

25, 22.7, 22.8, 17, 19, y 24 de la CADH, todos ellos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

10. Arcadia manifestó haber cumplido con los lineamientos internacionales al realizar su mayor esfuerzo para garantizar el goce a los DDHH, por lo tanto, dentro de la oportunidad procesal, interpuso como excepción preliminar la falta de agotamiento de los recursos internos. Por su parte, la CIDH emitió su informe de fondo el 1 agosto de 2018 y decidió someter el caso ante la Corte IDH el 5 de noviembre de 2018, la cual señaló que procedimiento oral se adelantaría el día 20 de mayo de 2019.

2. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO

2.1 Aspectos preliminares de admisibilidad

11. De conformidad con los arts. 46.1. a de la CADH y 42 del Reglamento de la Corte IDH, el Estado tiene la posibilidad de presentar excepciones preliminares en el trámite de admisibilidad ante la CIDH, por lo cual Arcadia interpuso, en dicha etapa procesal, la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos contra la determinación de la admisibilidad del caso en cuestión; así, al presentar esta excepción de manera expresa y oportuna no se dio una renuncia tácita por parte del Estado frente a ellas¹.

2.1.1 Falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna de Arcadia

12. El SIDH, en reiterada jurisprudencia, establece que uno de los requisitos de admisibilidad de las peticiones individuales es el previo agotamiento de los recursos internos, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos². En cuanto a esto, la Corte IDH

¹ Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 81; y Corte IDH. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 25

² Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 39.

ha determinado que, debido al carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional de los derechos humanos³, se debe permitir al Estado resolver la controversia según su derecho interno antes de enfrentar un proceso internacional⁴.

13. Como se desprende de la plataforma fáctica del caso, la excepción preliminar interpuesta por esta agencia fue presentada de manera oportuna, es decir, antes de cualquier consideración respecto al fondo⁵.

14. Al momento de ocurrencia de los presuntos hechos vulneratorios, existían, al interior del Estado, remedios procesales al alcance de las presuntas víctimas. Así, frente a la decisión de exclusión de la condición de refugiado, los recursos disponibles dentro de la legislación interna de Arcadia eran (i) el recurso de casación administrativa y (ii) el recurso de juicio de amparo⁶. En cuanto a la privación de la libertad el Estado disponía del recurso de (iii) Habeas corpus para determinar si una medida se constituye o no en una privación ilegal o arbitraria de la libertad.

15. De acuerdo a los hechos del caso, las presuntas víctimas tenían pleno conocimiento de la existencia de estos recursos y contaban con la oportunidad de obtener la asistencia legal necesaria para la protección de los derechos convencionales⁷, dado que las autoridades de Arcadia suministraron esta información a través de folletos y charlas informativas, especificando de manera clara y precisa los derechos de los que eran titulares, así como los recursos que estaban a su disposición y la posibilidad de solicitar asistencia y representación jurídica gratuita, de comunicarse con su consulado, entregando para tal efecto una lista con datos de contacto de

³ Corte IDH. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras. (Fondo). Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 85.

⁴ Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 142.

⁵ Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, párr. 135.

⁶ RPA N°10.

⁷ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-11/90. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b CADH). 10 de agosto de 1990.

organizaciones de la sociedad civil y clínicas jurídicas que podrían asesorarles y representarles legalmente⁸.

16. Ahora bien, con relación a los recursos, la Corte IDH ha sostenido que es deber del Estado demostrar que, además de disponer de recursos internos, estos son adecuados, idóneos y efectivos⁹, motivo por el cual se procede a demostrar que los recursos no agotados por las presuntas víctimas cumplen con estas exigencias.

a) Recurso de Casación Administrativa frente al Decreto Ejecutivo que ordena la deportación

17. La vía administrativa, en el Estado de Arcadia, contempla los recursos de la reconsideración y la casación administrativa; sin embargo, el primero no contaba con vocación de éxito, pues, de acuerdo a la legislación interna, el encargado de resolver el recurso es el superior jerárquico de quien adoptó la decisión objeto de reproche, motivo por el cual, al ser el presidente el funcionario que emitió el Decreto Ejecutivo¹⁰, no existía un superior jerárquico, lo que implica que la respuesta al recurso seguramente sería negativa.

18. Ante la carecía de efectividad del recurso de reconsideración, derivada de la particularidad del caso en concreto, era procedente agotar el recurso de la casación administrativa, el cual podría asumirse como un recurso extraordinario, frente a los cuales este Honorable Tribunal establece que sólo deberán agotarse en la medida en que con ellos se pueda efectuar una revisión de un caso en concreto¹¹, máxime si el recurso es accesible y efectivo¹².

⁸ RPA N°9,24,47 y 50.

⁹ Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 87; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 90; y Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C no. 226, párr. 13.

¹⁰ RPA N°10 y 23.

¹¹ Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 1, párr. 85.

¹² TEDH, Caso Akdivar v. Turkey, application no. 21893/93, sentencia del 16 de septiembre de 1996, párr. 66.

19. Al respecto, se debe tener en cuenta que este recurso consiste en una impugnación de una decisión administrativa ante un Tribunal especializado en la materia¹³, lo que implica que: i) lo resuelve una autoridad independiente de quien emitió el Decreto Ejecutivo, ii) la autoridad es experta en la materia, iii) la revisión del caso es individual, iv) está en la capacidad de revocar la medida objeto de revisión, v) no se exigen formalidades especiales para su presentación y vi) quien lo resuelve no es un tribunal de cierre. En este sentido, es claro que el recurso es, en la práctica, ordinario y, además, *adecuado* pues a través de él se obtiene un amparo judicial de los derechos que los peticionarios consideran como vulnerados¹⁴, es *idóneo* para proteger la situación jurídica infringida¹⁵, dado que el resultado para el cual ha sido concebido consiste en impugnar una decisión administrativa, y por último en cuanto a su *efectividad* se tiene por cumplida debido a que puede proveer lo necesario para remediar una situación en la que se configure una violación un derecho humano¹⁶.

b) Recurso de Juicio de amparo frente al Decreto Ejecutivo que ordena la deportación

20. En el presente caso, la totalidad de los peticionarios no hicieron uso del recurso ordinario de juicio de amparo *disponible* en la legislación interna del Estado de Arcadia, pese a que era *adecuado* para impugnar el no reconocimiento de la condición de refugiado, ya que propende por la protección de los derechos fundamentales de la persona en el supuesto de que la exclusión de la condición de refugiado fuese contraria a la CN o los tratados internacionales¹⁷; además, la acción de amparo tiene la capacidad de tutelar los derechos vulnerados, lo que demuestra su *idoneidad* al permitir establecer si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos de los migrantes

¹³ RPA N°10.

¹⁴ Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 67.

¹⁵ Corte IDH. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales, supra nota 3, párr. 88.

¹⁶ Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 136.

¹⁷ Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs Honduras, fondo, supra nota 15, párr. 67.

con la expedición del Decreto Ejecutivo. En lo que refiere a su *efectividad*, esta se ve satisfecha debido a que con su ejercicio se tutela la situación jurídica objeto de las pretensiones de los peticionarios y determina si se presentaron violaciones de los derechos contemplados en la Convención¹⁸.

21. Por último, en cuanto a la interposición del amparo judicial por parte de 271 personas y que fue resuelto de manera desfavorablemente, este Honorable Tribunal ha establecido que el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces¹⁹. Ahora bien, es claro que el recurso de amparo es efectivo, adecuado e idóneo, además disponible en el ordenamiento de Arcadia al momento de los hechos, por lo cual era menester de todos los peticionarios agotarlo antes de acudir a instancias internacionales.

c) Recurso de Habeas corpus frente a la presunta vulneración de la libertad personal

22. Como lo ha señalado la Corte IDH, el recurso en comento se encuentra regulado por los ordenamientos americanos y consiste en una tutela directa de la libertad personal con la que se busca evitar detenciones arbitrarias a través de un análisis efectuado por parte de una autoridad judicial que examine la legalidad de la privación y, de ser el caso, decrete la libertad de la persona²⁰. Así, si los peticionarios consideraban que de las medidas adoptadas por el Estado de Arcadia se derivaba una privación ilegal o arbitraria de su libertad debían haber instaurado un

¹⁸ Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr.191; Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2016. Serie C No. 322, párr. 149; Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 199.

¹⁹ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 67.

²⁰ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 33.

recurso de habeas corpus, pues este, en el SIDH, sería el recurso *adecuado* para lograr la libertad de quienes hayan sido detenidos de manera ilegal o arbitraria²¹.

23. La excepción preliminar de la falta de agotamiento de los recursos internos es procedente al no configurarse ninguna de las excepciones estipuladas en el art. 46.2 de la CADH. Esto teniendo en cuenta que la legislación de Arcadía garantiza el debido proceso legal al disponer, a nivel interno de recursos ordinarios y extraordinarios al alcance de las presuntas víctimas, ofreciendo también, defensa técnica para las mismas a cargo del Estado.

24. Debido a que no fueron agotados a nivel interno, los recursos disponibles, idóneos y efectivos, se considera que la CIDH no debió admitir la petición presentada por los representantes de las presuntas víctimas por lo que se solicita a la Honorable Corte IDH acoger la excepción preliminar y no realizar el análisis de fondo del caso²².

d) Recurso de reparación del daño directo

25. La Corte IDH, ha establecido que el Estado tiene la obligación de investigar violaciones a derechos humanos y sancionar a los responsables. El cumplimiento de esta obligación consiste no sólo en prevenir sino también investigar las violaciones de derechos reconocidos en la Convención, así como procurar el restablecimiento, la reparación de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos²³.

26. En ese sentido, si las presuntas víctimas consideraban que se había vulnerado uno de sus derechos y, por lo tanto, debían ser reparados, debieron acudir, en primera instancia, al ordenamiento jurídico interno para que se determinara si efectivamente se habría presentado dicha

²¹ Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 34.

²² Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278. Párr. 144.

²³ Corte IDH. Caso hermanos Landeta Mejía y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr.214.

vulneración y era procedente la reparación; sin embargo, las presuntas víctimas optaron por acudir al sistema interamericano sin agotar el recurso de Reparación del daño directo contemplado en la legislación de Arcadia para tal efecto.

27. Este recurso era adecuado²⁴ debido a que fue concebido para atender situaciones en las que se pretende una reparación por supuestas violaciones a los DDHH, era un recurso idóneo²⁵, pues el mismo permite que el ordenamiento jurídico interno determine si existió o no una vulneración a DDHH y, de ser procedente, otorgar una indemnización frente al daño verificado.

28. Además, cumplía con el requisito de efectividad, es decir, capaz de producir el resultado para el que fue concebido²⁶, el cual era recibir determinar la responsabilidad del Estado en la vulneración de un derecho protegido por el ordenamiento jurídico y lograr una indemnización por ese concepto.

29. Finalmente, se debe considerar que el hecho de presentar el recurso no implica el agotamiento del mismo, pues se le debe dar la oportunidad al Estado de resolverlo de fondo, por lo que ante el rechazo del recurso, por haber sido presentado ante la autoridad judicial que no era competente para resolverlo, las presuntas víctimas debieron presentar nuevamente el recurso ante la autoridad que sí tenía competencia y no, como efectivamente ocurrió, acudir directamente a la jurisdicción interamericana.

3.2 Análisis de los asuntos legales relacionados con la CADH y otros instrumentos internacionales aplicables

24 Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. (Fondo). Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 88.

25 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 61.

26 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 117.

3.2.1 Arcadia respetó los arts. 22.7 y 22.8 de la CADH, en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento internacional

30. Primeramente, es primordial señalar que respecto de la aplicación de la normativa internacional, la Corte IDH establece que cuando se trate del derecho a buscar y recibir asilo, así como del principio de no devolución, no sólo se debe aplicar la normativa de la CADH, sino también la teoría del *corpus iuris* de los derechos de los migrantes²⁷, es decir, integrar la aplicación de los principales tratados referentes a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio, como lo es por excelencia la Convención 1951 y el Protocolo 1967 sobre el Estatuto de Refugiados,²⁸ con la jurisprudencia ya sentada de la Corte²⁹, para facilitar la interpretación de los temas ya descritos³⁰.

31. El buscar y recibir asilo en un territorio extranjero apela a la protección internacional de personas en situación de vulnerabilidad, motivo por el cual es considerado como un derecho humano por el SIDH³¹. Por su parte, el conceder el asilo se erige como un derecho del Estado³², por lo que no está obligado a concederlo³³. Así, para determinar el otorgamiento del asilo se deben analizar la regulación que sobre el tema hace el Estado y los Convenios Internacionales que regulan los derechos de las personas migrantes³⁴.

²⁷ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr.117.

²⁸ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-25/18. La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25, párrs. 41 y 42.

²⁹ Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 99.

³⁰ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 142 y 143.

³¹ CADH, art. 22.7.

³² Convención sobre Asilo Territorial. Art. I.

³³ Convención sobre Asilo Diplomático. Art. II.

³⁴ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra nota 26, párrs. 137 y 140; y Corte IDH. Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 74.

32. En este sentido, el art.48 de la CN de Arcadia regula este derecho a la luz de los instrumentos internacionales que desarrollan los derechos de los migrantes; además, el procedimiento para la solicitud de asilo se encuentra debidamente reglado en la legislación interna. En adición, el Estado decidió abrir sus fronteras, permitiendo el ingreso de las personas provenientes de Waira, a quienes se les brindó atención médica y, con el fin de garantizar su protección, decidió reconocer como refugiados *prima facie* a todas esas personas³⁵; hechos que, en su conjunto, demuestran que Arcadia no solo cumplió con lo establecido en los convenios internacionales, sino que en la práctica le dio un alcance mucho más amplio a este derecho.

33. Por otro lado, el art. 22.8 convencional y el art. 33 de la Convención 1951 consagran el principio de no devolución o *non refoulement*, el cual prohíbe al Estado expulsar de su territorio a un extranjero hacia un país en el que sus derechos a la vida o libertad se encuentren en peligro de vulneración por razones de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas³⁶.

34. En este orden, se debe poner de presente que, en virtud del principio de soberanía y el derecho de proteger sus fronteras, los Estados tienen la facultad de fijar y regular sus políticas migratorias³⁷, las cuales deben estar en armonía con las normas de la CADH³⁸; en ejercicio de esta facultad, Arcadia determinó que la comisión de delitos de lesa humanidad o graves delitos comunes por parte de los solicitantes se constituían en los parámetros para que, de manera excepcional, no se reconociera la condición de refugiado, esto con el fin legítimo de proteger los intereses nacionales.

35. En adición, Arcadia respetó el derecho de los migrantes a no ser rechazados en la frontera ni expulsados sin un análisis adecuado e individual de sus peticiones de acuerdo a las exigencias

³⁵ HC. N°11, 13 y 18.

³⁶ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra nota 26, párr. 134.

³⁷ Corte IDH. Caso Vélez Looz Vs. Panamá, supra nota 25, párr. 97.

³⁸ Corte IDH. Caso de Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 18 de agosto de 2000.

dimanadas del contenido y alcance del artículo 22.8 de la CADH³⁹, pues, tal y como se desprende de los HC, el Estado optó por acogerlos, garantizó sus derechos, adelantó las gestiones necesarias para el reconocimiento de la calidad de refugiado y, al momento de determinar la expulsión, evaluó cada una de las solicitudes individuales, decidiendo conforme a derecho.

36. Respecto a la expulsión de las 808 personas que cometieron delitos como la trata de personas y reclutamiento forzado, la misma se efectuó conforme a los parámetros de la legislación estatal y, si bien se admite que algunas de estas personas corrían un riesgo “razonable” y otras “alto”, Arcadia aseguró su protección durante toda su estadía en el territorio estatal; ahora bien, ante la imposibilidad de mantener un número tan alto de personas, y en ejercicio de su soberanía y los principios de solidaridad y responsabilidad compartida de la comunidad internacional, firmó un acuerdo bilateral con Tlaxcochitlán en el que se comprometía a recibir a los migrantes objeto de expulsión y a no devolverlos a Waira, medida adoptada con el único y legítimo fin de protegerlos.

37. Así las cosas, se debe tener en cuenta que la Corte IDH ha determinado que los Estados son responsables por las acciones u omisiones de sus agentes o del poder público⁴⁰; bajo esta perspectiva, Arcadia no puede ser declarado responsable por la devolución de las 808 personas a Waira, pues se trata de una decisión adoptada por el Estado de Tlaxcochitlán con la que, en uso de su autonomía, incumplió el acuerdo bilateral suscrito con Arcadia, decisión sobre la que este último no tenía ningún control efectivo ni ejerció influencia alguna.

3.2.2 Arcadia respetó el art. 4 de la CADH en relación con el principio de no devolución y las obligaciones de los arts. 1.1 de la CADH

38. La Corte ha señalado que el derecho a la vida es un presupuesto esencial para el disfrute de los demás DDHH y, por tanto, el Estado está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la inalienabilidad de

³⁹ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra nota 26, párr. 153.

⁴⁰ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 19, párr. 172.

este derecho e impedir su vulneración⁴¹, protección que involucra a toda la institucionalidad estatal⁴². En atención a esto el Estado de Arcadia, como se desprende de la plataforma fáctica del caso, respetó y garantizó este derecho a todas las personas migrantes mientras estuvieron bajo su jurisdicción y tutela.

39. Al respecto, es necesario que se tenga en cuenta que, además de los hechos cometidos por sus agentes estatales, un Estado puede ser declarado internacionalmente responsable por aquellos actos perpetrados por terceros actuando con connivencia o ante la inacción de autoridades del Estado⁴³. Frente a esto, no se debe desconocer que los hechos en que se sustenta la presunta vulneración del derecho a la vida por parte de Arcadia ocurrieron en otro Estado, sin que se conozca los responsables de los mismos y sin que medie prueba alguna, siquiera sumaria, de la cual se pueda colegir la participación por acción, omisión o connivencia de un agente estatal de Arcadia.

40. Igualmente, es claro que para que proceda la declaración de responsabilidad internacional del Estado debe existir un nexo causal entre una conducta desplegada por este y la vulneración de un derecho internacionalmente protegido; no obstante, lo anterior, es posible extender este nexo causal a través de la implementación de criterios de previsibilidad y proximidad temporal⁴⁴, por lo que, si un daño posterior es esperable del acto original, al ser previsible, el actor original sería responsable por aquel. Frente a esto, de la plataforma fáctica del caso se desprende que Arcadia expulsó a las personas a quienes les fue vulnerado su derecho a la vida hacia el Estado de Tlaxcochitlán bajo la condición de que este no los devolviera a su Estado de origen; de ahí que, para Arcadia no era previsible que el derecho a la vida de estas personas pudiera verse vulnerado en atención a su expulsión inicial.

⁴¹ Corte IDH. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 122.

⁴² Corte IDH. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 356, párr. 107.

⁴³ Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, fondo, supra nota 15, Párr. 182.

⁴⁴ Observaciones del FFV a la apelación de la “Decisión estableciendo los principios y procedimientos a aplicar en las reparaciones” de la SPI I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso de la Fiscalía v. Thomas Lubanga Dyilo, 08 de abril de 2013.

41. Además, la Corte IDH ha aceptado que todo acto humano es causa de diversas consecuencias, siendo unas próximas y otras remotas⁴⁵, motivo por el cual no se considera admisible que se comprometa la responsabilidad internacional de un Estado por todas y cada una de las consecuencias de sus actos, en especial frente a aquellas, como en el caso *sub examine*, que no eran previsibles.

3.2.3 Arcadia respetó el art. 7 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento

42. La Corte IDH ha establecido, en sentido amplio, que la libertad es la facultad que tiene la persona de actuar conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado en el que se encuentre⁴⁶ y en lo que atañe a la libertad personal, se entiende por esta la mera libertad física de la persona⁴⁷. En este sentido, la finalidad del art. 7.1 de la CADH es la protección de la libertad física de las personas y su seguridad personal, dado que, ante la inexistencia de garantías suficientes, se configuraría una vulneración del derecho y la privación de las formas mínimas de protección legal⁴⁸.

43. Con relación a la privación de la libertad de migrantes, en el ámbito internacional se consagra la prohibición de privar de la libertad y sancionar a los migrantes en razón a su situación ilegal en el país, conducta que, de la plataforma fáctica, no fue realizada por Arcadia. Además, se ha determinado que si la medida es de carácter punitivo⁴⁹ o sancionatorio⁵⁰ se considerará como arbitraria, y, por tanto, contrarias a la CADH⁵¹; sin embargo, una

⁴⁵ Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 48.

⁴⁶ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párr. 52.

⁴⁷ O'DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos – Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Primera Edición. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá 2004. pág. 280.

⁴⁸ Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párr. 223; Asunto Gutiérrez Soler, Medidas Provisionales respecto de Colombia, Resolución de la Corte del 11 de marzo de 2005, considerando 12.

⁴⁹ Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/11/7, 14 de mayo de 2009, párr. 65.

⁵⁰ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/7/4, 10 de enero de 2008, párr. 53.

⁵¹ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-21/14, supra nota 30, párr. 147.

medida que restrinja un derecho humano, como lo es la libertad, puede no ser arbitraria siempre que esté debidamente fundamentada⁵².

44. Con el propósito de determinar la fundamentación de una medida que restringe la libertad, la Corte IDH ha señalado como requisitos: 1) prescrita por la ley, 2) que su finalidad sea compatible con la CADH⁵³, 3) que sea idónea⁵⁴, 4) necesaria⁵⁵ y 5) proporcional⁵⁶. Con base en estos criterios se realizará un juicio de valor, material y formal respecto de la decisión de detener preventivamente a las personas migrantes que cometieron delitos de lesa humanidad o graves delitos comunes, esto con el propósito de demostrar que tal decisión no constituyó una interferencia arbitraria ni afectó el núcleo esencial del derecho a la libertad personal y, por el contrario, garantizó el cumplimiento de las obligaciones convencionales que le asisten al Estado.

45. En primera instancia, la medida objeto de reproche se encontraba consagrada en el artículo 111 de la Ley General sobre Migración de Arcadia, señalando de manera expresa las causales de procedencia. Respecto a la finalidad, la jurisprudencia de este Honorable Tribunal ha explicado que la misma hace alusión a que las causales de restricción del derecho a la libertad deben observar las garantías previstas en la CADH⁵⁷, frente a lo cual el Estado pone de presente que la decisión de limitar la libertad de las personas migrantes fue adoptada con el propósito de brindarles la debida protección, pues es claro que se trataba de un grupo poblacional particularmente vulnerable al encontrarse en un país que no conocían, en donde no contaban con un lugar en el cual pudieran vivir y al llegar no contaban con los recursos necesarios para subsistir; así, el conducirlos a instituciones estatales para que allí pudieran dormir cómodamente, alimentarse saludablemente e incluso ser protegidos de manera directa por

⁵² Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275.

⁵³ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, *supra nota 42*, párr. 93.

⁵⁴ Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 98.

⁵⁵ Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Párr. 129.

⁵⁶ Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, *supra nota 25*. Párr. 166.

⁵⁷ Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 89.

autoridades estatales se constituyen en acciones que propenden por la garantía de otros derechos consagrados en la Convención, máxime si se tiene en cuenta que al permitir su ingreso al territorio nacional el Estado adquirió una posición de garante respecto de la seguridad de estas personas.

46. Con relación a la idoneidad, se entiende cumplida cuando la medida analizada sea adecuada para cumplir con el fin perseguido⁵⁸, el cual consistía en la protección de las personas migrantes, lo cual efectivamente se logró, pues, como se observa en los hechos del caso, durante su permanencia en instalaciones estatales a cargo de Arcadía no se materializó ninguna vulneración a los demás derechos que les reconoce la CADH. Por otro lado, la necesidad requiere que la limitación del derecho a la libertad sea absolutamente indispensable como medida excepcional para lograr la finalidad prevista⁵⁹, la cual evidentemente no se podía alcanzar de haberse garantizado la libertad de las personas, pues habría sido mucho más difícil para el Estado garantizar la seguridad, alojamiento y alimentación de la totalidad del grupo de migrantes en atención a la gran cantidad que hacían parte de él, motivo por el cual el alojarlas en instituciones a cargo del Estado representaba la mejor opción para la garantía de sus demás derechos.

47. Finalmente, frente a la proporcionalidad la Corte IDH ha precisado que la restricción del derecho a la libertad no resulte desmedida frente al cumplimiento de la finalidad perseguida⁶⁰, esto se ve cumplido si se tiene en cuenta que la restricción en sí misma no puso en riesgo de vulneración otros derechos y, por el contrario, garantizó que el Estado pudiera proteger a la totalidad de las personas migrantes que habían ingresado a su territorio.

48. Aunado a lo anterior, el SUDH exige que las condiciones de detención de las personas migrantes sean humanas, adecuadas y respetuosas⁶¹, prerrogativas cumplidas por el Estado, ya que ninguna persona en extrema vulnerabilidad fue detenida y, quienes sí lo fueron, estuvieron en la estación migratoria y separados de los condenados por comisión de delitos, asimismo, tuvieron acceso a los servicios de alimentación, educación, salud,

⁵⁸ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 42, párr. 93.

⁵⁹ Ibidem. Párr. 93.

⁶⁰ Ibidem. Párr. 93.

⁶¹ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/7/4, 10 de enero de 2008, párrs. 49 y 50.

diversas actividades y visitas. Igualmente, en ningún momento manifestaron su descontento o reproche a esta medida, pues nunca interpusieron un recurso de habeas corpus con el que pretendieran revocar esta medida al considerarla como una privación ilegal o arbitraria de su libertad, pese a que conocían los recursos existentes en el Estado y contaban con la asesoría legal de clínicas jurídicas.

49. Por todo lo esgrimido con antelación, se considera demostrada la actuación diligente, garantista y respetuosa respecto de las obligaciones contraídas en virtud del art. 7 y 1.1 de la CADH, al decretar como medida excepcional de protección la conducción de las personas migrantes a instalaciones estatales en procura de garantizar su protección. En ese sentido, se solicita de manera respetuosa a la Honorable Corte IDH que desestime la responsabilidad internacional de Arcadia por presunta vulneración del art. 7 en relación con el art. 1.1 de la CADH.

3.2.4 Arcadia respetó los arts. 8 y 25 de la CADH, en relación con el principio de no devolución y el art. 1.1 del mismo instrumento

50. Esta Honorable Corte ha precisado que las garantías consagradas en los arts. 8 y 25 de la CADH, representan el conjunto de requisitos procesales que deben observarse a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto del Estado que pueda afectar sus derechos⁶².

51. Ahora bien, el Estado de Arcadia procederá a demostrar, mediante un análisis detallado, el cumplimiento íntegro de cada una de las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25 de la CADH en el marco de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado adelantado a las personas migrantes que ingresaron al territorio, así como aquellos a través de los que se decidió la expulsión⁶³ de algunas de estas personas; todo esto en consonancia con las garantías

⁶² Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 69.

⁶³ Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 175.

convencionales y las directivas y criterios del ACNUR, especialmente, en relación con el art. 16 de la Convención 1951.

52. Una de las primeras garantías consiste en facilitar al solicitante el acceso a asesoría y representación legal, esto con el propósito de que este someta su solicitud ante las autoridades competentes⁶⁴, lo cual fue satisfecho por Arcadia al informar a las personas de la posibilidad de solicitar asistencia y representación jurídica, entregando una lista con los contactos de organizaciones civiles y clínicas jurídicas que podían representarles⁶⁵.

53. Otra de las garantías consiste en que la solicitud debe examinarse con objetividad, en el marco del procedimiento establecido, por una autoridad competente y a través de una entrevista personal⁶⁶, acciones cumplidas por el Estado, en tanto, para formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, las personas migrantes acudieron, con el fin de obtener el documento de reconocimiento, al CONARE al ser este el órgano competente para tal efecto, el cual se encargó de examinar y realizar una entrevista personal a cada uno de los solicitantes, en un plazo no superior a 24 horas.

54. También es necesario que las decisiones adoptadas por el órgano competente se encuentren debidamente fundamentadas con el fin de evitar que las mismas se tornen en arbitrarias⁶⁷. Frente a esto, Arcadia, por medio del CONARE y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sustentó las decisiones relacionadas con la regularización de las personas migrantes que ingresaron a su territorio en su ordenamiento jurídico interno, así como en las obligaciones contraídas con la

64 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra nota 26, párr. 159.a.

65 RPA. N°9.

66 Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, Determinación del estatuto de refugiado, No. 8 (XXVIII) (1977), párr. e.ii y e.iii.

67 Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, Párr.118; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.77.

ratificación de tratados internacionales de DDHH; además, el solo hecho de tener una decisión desfavorable a las pretensiones iniciales no implica que la misma carezca de fundamentación, pues aceptar esto implica que todas las controversias puestas a conocimiento de las autoridades estatales deban resolverse de manera satisfactoria.

55. Por último, se requiere que, en aquellos casos en que la decisión es desfavorable, se le informe a la persona del derecho que le asiste de someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada y, hasta que la autoridad competente adopte una decisión o resuelva el medio de impugnación, se permita al solicitante que permanezca en el país⁶⁸. Se deduce de la plataforma fáctica que las autoridades informaron a todas las personas, de manera oral y escrita, acerca de sus derechos y la serie de recursos disponibles para impugnar la detención y la resolución desfavorable de asilo⁶⁹ y, como medida garantista, el Estado permitió su estadía en el territorio nacional mientras se resolvía su situación legal.

56. Ahora bien, el art. 25 de la CADH regula la protección judicial, consistente en la garantía de contar con un recurso efectivo contra actos que las personas consideren violatorios de sus derechos humanos⁷⁰, lo que se erige como un pilar esencial de la sociedad democrática que se ve cumplida cuando el Estado cuenta con acciones o recursos de carácter judicial sencillos, rápidos, adecuados y efectivos⁷¹.

57. En ese sentido, la legislación interna de Arcadia contempla, frente a la decisión de exclusión de la condición de refugiado, los recursos de casación administrativa y de juicio de amparo⁷², recursos

⁶⁸ ACNUR. Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, 1992. Párr. 192.vi y vii; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra nota 59. párrs. 175.

⁶⁹ RPA N°50.

⁷⁰ Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 127.

⁷¹ Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Párr. 262.

⁷² RPA. N°10.

que, como se demostró de manera precedente, son considerados idóneos y efectivos para resolver una presunta infracción a los derechos de las personas migrantes por decisiones de carácter administrativo. En cuanto a la presunta privación de la libertad el Estado dispone del recurso de Habeas corpus para determinar si una medida se constituye o no en una privación ilegal o arbitraria de la libertad, recurso rápido, adecuado y efectivo para cuestionar la posible violación de los derechos reconocidos Convención⁷³.

58. De los hechos del caso se desprende que 217 personas sí pudieron impetrar el recurso de amparo, y que este fue resuelto de manera pronta y diligente, recurso que se caracteriza por su sencillez a la hora de presentarlo, dado que puede hacerse ante cualquier autoridad jurisdiccional, la cual está en la obligación de remitirlo al Juez de Amparo competente; además, su finalidad es la de amparar los derechos constitucionales que se vean afectados por decisiones de las autoridades del Estado.

59. Lo anterior demuestra el compromiso del Estado en el respeto y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25 convencionales, mediante la garantía del debido proceso a toda persona bajo su jurisdicción, en especial, a los migrantes, como sujetos de especial protección convencional, y la posibilidad de acceder y hacer uso de recursos efectivos ante autoridades judiciales y administrativas competentes, materializando así su derecho de defensa. En ese sentido, se le solicita esta H. Corte que decida que el Estado no es responsable internacionalmente por la presunta violación de los arts. 8 y 25 en relación con los arts. 1.1 de la CADH en el presente caso.

3.2.5 Arcadia respetó el art. 17 de la CADH en relación con el art 1.1 del mismo instrumento.

60. La vida familiar se constituye, de acuerdo a la Corte IDH, en un derecho que puede ser objeto de limitación, especialmente en el marco de procesos tendientes a definir la situación migratoria de uno de los miembros del núcleo familiar, pues este aspecto se encuentra enmarcado

⁷³ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra nota 26, párr. 160.

en la facultad soberana que le asiste a los Estados de implementar sus propias políticas migratorias en consonancia con los derechos humanos⁷⁴.

61. Así las cosas, se debe tener en cuenta que, como se demostró con antelación, los procedimientos con los que se definió la situación migratoria de las presuntas víctimas fueron adelantados cumpliendo todas las exigencias que tanto la CADH como la Corte IDH han establecido sobre la materia, motivo por el cual la decisión de su deportación, al encontrarse debidamente fundamentada, no puede considerarse como vulneratoria del artículo 17 de la Convención.

62. En atención a lo anterior, se solicita a este Honorable Tribunal declarar que Arcadia no vulneró el derecho consagrado en el artículo 17 de la CADH en perjuicio de las presuntas víctimas.

3.2.6 Arcadia respetó el art 19 de la CADH en relación con el art 1.1 del mismo instrumento

63. De acuerdo con lo señalado por el artículo 35.1 del reglamento de la Corte IDH, el informe mediante el cual la CIDH somete un caso a conocimiento de esta Honorable Corte debe incluir la identificación de las presuntas víctimas. Al respecto, la Corte IDH ha determinado que es posible aplicar la excepción a esta regla, desarrollada por el artículo 35.2 del mismo cuerpo normativo, siempre que se verifique la imposibilidad de la CIDH de identificar a las presuntas víctimas⁷⁵.

64. En este sentido, se pone de presente que, como se desprende de la plataforma fáctica del caso, las personas relacionadas como presuntas víctimas por parte de la CIDH son aquellas que fueron objeto de expulsión por parte del Estado de Arcadia⁷⁶, dentro de las cuales no se encontraba

74 Corte IDH. Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 417.

75 Corte IDH. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 356, párr. 16.

76 HC. N° 32 y 36.

ningún niño o niña⁷⁷, de lo cual se deduce que frente a ninguna de las presuntas víctimas relacionadas en el informe de fondo No. 24/18 se puede considerar como vulnerado el artículo 19 de la CADH, pues los mismos no ostentan la calidad de niños o niñas.

65. Ahora bien, respecto a la excepción contemplada en el artículo 35.2 del reglamento de la Corte IDH, el Estado considera que su aplicación es improcedente, pues la identificación de los niños o niñas que presuntamente habrían sido víctimas de vulneración de sus derechos por las actuaciones de Arcadia no se ajusta a los supuestos que ha señalado la Corte IDH⁷⁸; máxime si se tiene en cuenta que incluso en la petición inicial ante la CIDH se especifica que la misma se realizaba a nombre de las personas deportadas.

66. Bajo estas consideraciones, se solicita a este Honorable Tribunal declarar que Arcadia no vulneró el derecho consagrado en el artículo 19 de la CADH en perjuicio de las presuntas víctimas, pues ninguno de ellos es titular de tal derecho.

3.2.7 Arcadia respetó el art. 24 de la CADH en relación con el art. 1.1 del mismo instrumento

67. La Corte IDH establece que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al *jus cogens*, por lo cual es inseparable de la dignidad de la persona⁷⁹, por esto sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico⁸⁰; de ahí que se considere a este principio como básico, general y fundamental frente a la protección internacional de los derechos humanos⁸¹. Igualmente, al tenor de este principio, se encuentra prohibido todo tratamiento discriminatorio⁸², por ende, la adopción de disposiciones

⁷⁷ RPA N° 17.

⁷⁸ Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, párr. 47.

⁷⁹ Caso Espinoza González Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 216

⁸⁰ Corte I.D.H. Yatama vs. Nicaragua, Serie C No 127, (23 de junio de 2005), párr. 184.

⁸¹ Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 18, No discriminación, párr. 1

⁸² Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.parr 83

basadas en la superioridad o inferioridad de una persona o grupo de personas respecto a las demás contraría lo dispuesto por la CADH⁸³.

68. Al respecto, la Corte IDH ha establecido que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados y una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias⁸⁴.

69. Respecto a las consideraciones positivas, esta agencia reconoce el planteamiento de esta Honorable Corte según el cual las personas migrantes están en una situación de extrema vulnerabilidad⁸⁵; en atención a esto, el Estado de Arcadia no tolera las situaciones de discriminación en perjuicio de los migrantes adoptadas por un sector de la población arcadiense, motivo por el cual adoptó medidas afirmativas tendientes a suprimir estos brotes de xenofobia a través de campañas de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos y a la población en general para erradicar la discriminación, socializando además los derechos de los que son titulares las personas migrantes y refugiadas⁸⁶.

70. Respecto a la alegada discriminación por una presunta protección desigual de la ley interna⁸⁷, el Estado rechaza dicha postura, pues es claro que esta nunca se configuró, debido a que a todas las personas que ingresaron a Arcadia provenientes de Puerto Waira se les aplicaron las mismas disposiciones legales. Además, sin tomar en consideración el estatus migratorio en que se

⁸³ Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, art. 1.2.

⁸⁴ Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246.

⁸⁵ Corte IDH. Caso Vélez Looz Vs. Panamá, supra nota 25, párr. 98.

⁸⁶ RPA. 40 y 71.

⁸⁷ Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Reparaciones y Costas, serie C No. 224, párr. 199, y Caso Rosendo Cantú y otra, serie C 225, párr. 183.

encontraban las personas provenientes de Puerto Waira, el Estado de Arcadia brindó un tratamiento igualitario⁸⁸.

71. Ahora bien, en el caso *sub judice* no es posible afirmar que el motivo por el cual fueron excluidas de la condición de refugiados las 808 se encontraba fundado en razón a la nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social u otro estatus, pues es claro que tal decisión tuvo como fundamento una norma de carácter general y abstracta, lo que implica que la misma se ajustó a los parámetros señalados por el art 1.1 de la Convención⁸⁹ y a lo dispuesto sobre la materia en la jurisprudencia de esta Honorable Corte⁹⁰.

72. Con base en estos argumentos, se demuestra que el Estado cumplió con sus obligaciones convencionales al brindar un trato igualitario a todas las personas migrantes que ingresaron a su territorio y, por tanto, no le es endilgado ningún tipo de discriminación, por el contrario aplicando la cláusula de art 26 de la CADH, el estado garantizo unos mínimos, pero la dificultad para darle cumplimiento, ocasionaron la creación del acuerdo bilateral con Tlaxcochitlán , donde igualmente siguió destinando recursos.

73. Arcadia garantizó los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes provenientes de Puerto Waira; Como deberes específicos derivados de la Convención 1951 y su Protocolo 1967.

74. Según el art. 26 de la CADH, los DESC tienen un carácter de “desarrollo progresivo”, es decir, no es posible que su plena efectividad se logre en un breve periodo de tiempo, dado que se

⁸⁸ Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana sentencia de 8 de septiembre de 2005, serie C 130. Párr. 155.

⁸⁹ Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329. Parr240

⁹⁰ Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República dominicana sentencia de 28 de agosto de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr 256

trata de obligaciones de mediano y largo plazo, requieren de un margen de flexibilidad⁹¹ y se ejecutan acorde a las condiciones culturales, políticas y sociales de cada país, enfrentando las dificultades del mismo⁹².

75. Como se desprende de la plataforma fáctica del caso, el Estado de Arcadia adoptó medidas de carácter progresivo en la implementación de los DESC en favor de las personas migrantes en la medida de sus posibilidades, prueba de ello se encuentra en la ayuda humanitaria de emergencia que se brindó inicialmente, así como en las brigadas de salud efectuadas y la posibilidad de que los migrantes que lo requirieran pudieran hacer uso de los servicios de salud locales⁹³, otorgando prioridad a la garantía y protección a su derecho a la salud⁹⁴.

76. En adición, tras el reconocimiento prima facie a todas las personas waienses que cumplieran con la ley de refugiados, y siempre que no se encontraran dentro de uno de los supuestos del art 40 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, se concedió, en un lapso de 24 horas, un permiso⁹⁵ con el que se permitía el ejercicio de su derecho al trabajo⁹⁶; igualmente, se creó un proyecto para asesorar a las personas en búsqueda de empleo e inserción en programas sociales de derechos económicos, sociales y culturales⁹⁷.

77. Por otro lado, se debe tomar en consideración que con el propósito de lograr la efectividad de los DESC también es necesaria la cooperación internacional⁹⁸; así, cuando Arcadia enfrentó

⁹¹ Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Sentencia de 1 de julio de 2009, párr. 102.

⁹² Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), U.N. Doc. E/1991/23, Quinto Período de Sesiones (1990), párr. 9.

⁹³ HC. N° 16

⁹⁴ Comisión IDH, Informe N°27/09, Fondo, Caso 12.249, “Jorge Odir Miranda Cortez y otros vs. El Salvador”, 20 de marzo de 2009.

⁹⁵ HC. N° 18 y 19.

⁹⁶ Comisión IDH, Informe N° 100/01, Caso 11.381, “Milton García Gajardo y otros vs. Nicaragua”, 11 de octubre de 2001, párr. 101.

⁹⁷ RPA. N° 40.

⁹⁸ Cançado Trindade, Antonio, La protección de los DESC en Estudios Básicos de Derechos Humanos, T. 1, San José, 1994, pág. 53.

serios desafíos para garantizar estos derechos con ocasión de la cantidad de personas que querían ingresar a su territorio se realizó un llamado a la solidaridad y responsabilidad compartida a la comunidad internacional⁹⁹, pero no se obtuvo respuesta alguna, lo que implicó que el Estado debió asumir de manera exclusiva la carga económica y financiera que significaba la garantía de estos derechos de manera efectiva, tarea que ejecutó en la medida de sus posibilidades y siempre en procura de garantizar los intereses de las personas migrantes.

78. En este orden, queda en evidencia que el Estado de Arcadia cumplió con sus obligaciones en esta materia, ya que adoptó medidas propias tendientes al logro progresivo y la efectividad de los DESC, pero debido a que la garantía absoluta de estos derechos demanda una gran inversión económica y financiera, y ante la falta de cooperación internacional en la región, es claro que se trataba de una carga desproporcionada para el Estado el pretender que se garantizaran de manera generalizada y total, pues su garantía es de carácter progresivo y debe obedecer a las realidades sociales del mismo Estado.

79. Por lo cual se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que declare que el Estado respetó lo contenido en el artículo 24 de la CADH.

4. PETITORIO

80. Por las consideraciones expuestas, el Estado de Arcadia solicita a esta Honorable Corte IDH que concluya y declare:

- i) La procedencia de la excepción preliminar interpuesta por el Estado y, consecuentemente, la inadmisibilidad del caso.
- ii) Que, en caso de que nos sean admitidas las excepciones preliminares, el Estado no se declare responsable internacionalmente por la violación de los derechos consagrados en

⁹⁹ HC. N° 19.

los arts. 5, 7, 8, 22.7, 22.8, 17, 19, 24, 25 de la CADH, todos en relación con el art. 1.1. de la misma en perjuicio de Gonzalo Belano y las 807 personas waienses.

- iii) Así mismo, dado que el Estado cumplió con las obligaciones derivadas de la Convención 1951 y su protocolo de 1967, no da lugar a reparaciones con razón al derecho de los refugiados.
- iv) Que de conformidad con el art. 63.1, se determine la no procedencia de reparaciones y iv) que no se condene en gastos y costas al Estado.